

EL TEMA SEGURIDAD EN LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL: AMBIVALENCIAS DE UN ESTADO EN TERAPIA INTENSIVA

*Bertha García Gallegos**

El tratamiento de los temas de Seguridad, la amplitud y transparencia con que la sociedad asume su discusión pública, el conocimiento que de él tengan las autoridades gubernamentales y el uso que hagan de este conocimiento para orientar las políticas públicas, son indudablemente poderosos indicadores de la fortaleza o debilidad de un sistema político y en general de la cultura política de una comunidad.

El fin de la Guerra Fría, en los años noventa del siglo XX, la entrada exitosa de la comunidad académica al estudio y análisis de estos temas y la necesidad imperiosa de las democracias renacientes después de las dictaduras, han sido en América Latina los incentivos más importantes para el desarrollo de los conceptos y de las instituciones de Seguridad. Se entiende también con más claridad que ésta es un área que abarca diversos ámbitos y especialidades, y que es proclive a ser analizada y practicada desde múltiples perspectivas (estrategia y política internacional, diplomacia, defensa, seguridad y orden público, protección civil) y procesos de gestión, administración y operación (ministerios, comisiones parlamentarias, fuerzas y cuerpos de defensa, seguridad interior, protección de la comunidad). La mayor parte de estas dimensiones tienen que ver con el Estado Nacional y con su capacidad para sobrevivir y permanecer en tanto unidad política por excelencia, representando y gestionando los intereses de su sociedad en un orden internacional cada vez más cambiante y exigente.

De allí que las estrategias y las capacidades que tengan las instituciones del Estado para definir y marcar los rumbos en este campo, son cruciales en la determinación del éxito o fracaso de la sociedad en un mundo globalizado. De los resultados,

CONTENIDO

EDITORIAL

EL TEMA SEGURIDAD EN LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL: AMBIVALENCIAS DE UN ESTADO EN TERAPIA INTENSIVA

PÁG. 1

LOS MODELOS POLICIALES: POLICÍA DE ESTADO Y POLICÍA DE COMUNIDAD; UN DEBATE AÚN NO RESUELTO

José Manuel Ugarte.

PÁG. 2

POLICÍA: EL MITO DE LA COERCIÓN LEGÍTIMA

Juan Ramón Quintana

PÁG. 4

LA EFICACIA DE ROLES POLICIALES Y FISCALES EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA CRIMINALIDAD; ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Juan Carlos Rueda.

PÁG. 6

ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN DEL TC FRENTE AL SERVICIO MILITAR Y LA OBJECCIÓN DE CONCIENCIA

Juan A. Rivadeneira F.

PÁG. 7

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES EN EL TEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PÁG. 8

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

Mayo - Junio 2007

PÁG. 8

cualesquiera que sean, son responsables las autoridades políticas elegidas por voto popular y los funcionarios designados por ellas. Al respecto, en nuestro país están ocurriendo dos procesos sustantivamente diferentes en sus resultados: uno exitoso y el otro, lamentablemente deficiente.

Por una parte, es notable y vale la pena calificarla como altamente positiva, la gestión del Dr. Gustavo Larrea, ministro de Gobierno, en cuanto al empeño que ha puesto en impulsar el proceso de reforma de la Policía Nacional. No es menos relevante, por supuesto, el espíritu de superación y de cambio que se ha ido gestando en la propia institución policial, a menudo injustamente vilipendiada por una ciudadanía que fácilmente ha tendido a magnificar sus errores y a no reconocer sus no pocos éxitos. Desde 2004, partiendo de una amplia consulta a la ciudadanía, la Policía formuló un "Plan de Modernización" con notables avances conceptuales y propuestas estructurales. En el momento actual es indudable que ese plan se enriquecerá con el empeño ministerial, demostrando que cuando existe voluntad política es posible lograr el cambio institucional que el Ecuador necesita.

No podemos decir lo mismo sobre la gestión del sector Defensa, a pesar de los aspectos favorables aportados por la nueva Ley Orgánica de Defensa Nacional y la inclusión de civiles al frente del Ministerio. El "Plan Ecuador" es un instrumento insuficiente y con enormes falencias operativas. Por otra parte, nos atrevemos a decir que el empleo que hace el Gobierno de las Fuerzas Armadas —llegando a rozar los límites de la manipulación— tarde o temprano rendirá resultados negativos, dañará aún más a la institución militar, diluyendo sus misiones específicas, y debilitando las capacidades de defensa del Estado ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas se deben al Estado y su conducción política debe estar ordenada en función del bien común, el "bien defensa" patrimonio de todos los ecuatorianos. Y si bien es cierto que quien representa ese manejo del bien común es el gobierno de turno, de ningún modo las Fuerzas Armadas son el aparato de ejecución de sus planes y programas, muchas veces orientados a mantener clientelas políticas.

* Socióloga. Profesora de la PUCE. Directora Ejecutiva Democracia, Seguridad y Defensa. Correo electrónico: bgarcia@andinanet.net

LOS MODELOS POLICIALES: POLICÍA DE ESTADO Y POLICÍA DE COMUNIDAD; UN DEBATE AÚN NO RESUELTO

José Manuel Ugarte*

Existen, indudablemente, tantos modelos policiales como países en el mundo; los sistemas de seguridad pública de cada país derivan en último análisis de su historia, y los modelos extranjeros que pueden adoptarse sufren un proceso de adaptación a la historia y realidad locales. Sin embargo, a grandes rasgos, todos derivan de dos grandes troncos que representan una opción fundamental.

1. Policía de Estado: Desde el poder estatal, hacia los ciudadanos

El modelo de *Policía de Estado* es un sistema policial constituido desde el poder hacia el pueblo; de arriba hacia abajo. Se originó desde el poder real, en la Francia absolutista; pero perduró y se perfeccionó tras la Revolución Francesa. Se suele situar el nacimiento de la Policía francesa en marzo de 1667, con la separación entre las funciones de *justicia* y las de *policía*, concepto reforzado, después de la Revolución Francesa, por el surgimiento de la estricta separación entre la administración y los órganos judiciales.

Producida la Revolución Francesa, se proclamó a la *Policía Municipal* como la única acorde con los principios democráticos ahora vigentes. No obstante, concluido el período inicial de agitación e inestabilidad política, se hizo evidente para el gobierno la necesidad de contar con una Policía dependiente del poder central, cuando menos en París. De ese modo, el Directorio, el Consulado y poste-

riormente el imperio organizaron la Policía como órgano dependiente del poder central, si bien se mantuvieron las *Policías Municipales*. Las funciones de *Policía Administrativa* —de seguridad— y *Policía Judicial*, estuvieron reunidas en las mismas instituciones. Pero a fines del siglo XIX se tendió a la *separación institucional* de las funciones de *Policía de Seguridad* y de *Policía Judicial*.

Liberada Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue restablecida la *Seguridad Nacional*, con cuatro grandes direcciones sustantivas: la *Policía Judicial*, organizada en servicios regionales, *Vigilancia del Territorio*, desplegada siguiendo las zonas de defensa, *Seguridad Pública* —de seguridad— dependiente de la autoridad del Prefecto, e *Investigaciones Generales*— organismo de inteligencia criminal y que en ciertas etapas cumplió funciones limitadas de inteligencia política. El modelo configurado en Francia constituye el modelo típico de estructura de seguridad de Europa continental y América Latina.

2. El modelo de Policía de Comunidad: la Policía formada a partir de los ciudadanos

En cuanto al modelo de *Policía de Comunidad*, sus orígenes fueron muy diversos a los del modelo anterior. Sus raíces estuvieron en Inglaterra. A diferencia del modelo de *Policía de Estado*, surgido del poder real y ejercido por funcionarios públicos, el modelo de *Policía de Comunidad* surgió del ejercicio de la función policial por parte de ciudadanos comunes, investidos de facultades policiales por parte del Estado. A partir del siglo XIII surgió el sistema de

Policía constabularia *de parroquia*, a base de cargos honorarios, ejercido por una persona en cada parroquia, en forma rotativa. Más tarde, las condiciones dieron lugar a la creación, de una Policía centralizada y profesionalizada, cuyo objeto fundamental fue la *prevención del delito*. Nació así la *Metropolitan Police*, conocida popularmente como *Scotland Yard*.

Al riguroso proceso de selección y fuerte adiestramiento, siguió una tradición de ascenso basada en el mérito, dedicación absoluta y mentalidad de servicio público, y control. La institución así constituida empleó máximo esmero en sus relaciones con la comunidad, cuyo apoyo buscó explícitamente. Se trataba de una institución del Estado británico, y pagada por éste; dependía del Ministerio del Interior. No obstante, en el interior del país sobrevivió la organización policial local, que fue estructurándose –y paulatinamente profesionalizándose– sobre la base del *condado*.

El sistema originario de seguridad pública británico fue trasladado a las colonias inglesas, particularmente a los **Estados Unidos de América**, donde el principal ejecutor de la seguridad pública, especialmente en las áreas rurales, era el *sheriff* del *condado*, designado por el Gobernador. Más tarde, la complejidad de la sociedad industrial y el aumento de la población urbana llevó al surgimiento de la Policía profesional nació en las *ciudades*. Se trató por ello de una *Policía Municipal*, originada en el *Municipio*. Las instituciones policiales nacionales nacerían después.

Pero los municipios estaban fuertemente dominados por la *política partidaria*, y los consejos municipales controlados por caudillos políticos locales, que empleaban prácticas que hoy se denominarían *clientelares*. Los policías respondían primariamente a caudillos políticos locales, que en definitiva eran autores de sus nombramientos. El reclutamiento no era selectivo, se efectuaba fundamentalmente en base a recomendaciones políticas. Tampoco existían un adecuado adiestramiento, supervisión ni control eficaces; a la falta de adecuadas capacidades en tal sentido se aunaba la presencia de la influencia política como factor fundamental de promociones y ascensos. La politización de la Policía derivó en un fuerte grado de corrupción.

La primera tentativa de cambio se realizó con un *progresista* paradigmático como Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos y fundador del *Federal Bureau of Investigation* (Oficina Federal de Investigación), organismo policial de investigación de delitos federales, con particular énfasis en el delito organizado, y también con funciones en materia de policía de seguridad del Estado y contrainteligencia, además de servir de elemento fundamental de apoyo técnico y doctrinario para todos los organismos policiales del país. Las reformas procuraron en primer lugar la *despolitización de la Policía*, buscando por otra parte *centralizarla*, *establecer una carrera administrativa basada en el mérito y en el perfeccionamiento profesional*, y *mejorar el reclutamiento y el adiestramiento*. La

centralización suponía una concentración de la autoridad en manos del jefe de Policía, con comisiones de control, alejándola de los caudillos políticos barriales o zonales. También se procuró *redefinir la función de la Policía de modo más estricto: la función policial consistiría exclusivamente en prevenir y reprimir el delito*, retirándola de las funciones de carácter social que también favorecían su politización.

Entre 1910 y 1960 surgió en Estados Unidos una nueva tendencia de cambio en materia policial, bajo los *reformadores*. En este caso, se trató concretamente de *Jefes de Policía*, es decir, de *policías profesionales*, que procuraban aplicar a sus tareas conocimiento científico y profesional. A partir de esa base, pugnaron por asumir el control de sus departamentos, haciéndolos autónomos respecto de influencias como los *partidos políticos*, estableciendo las reglas de su departamento y regulando a su personal. El progreso científico y los cambios tecnológicos aplicados a la actividad policial, tanto al patrullaje como a la investigación criminal, caracterizaron este periodo de formación de la moderna Policía estadounidense. Durante la década de 1960, no obstante, la actividad policial en Estados Unidos experimentó una seria crisis debido al auge de la delincuencia organizada. Otro de los factores fue el surgimiento de la lucha por los derechos civiles y contra la segregación racial.

La Policía estaba en su inmensa mayoría integrada por blancos, y era percibida por las minorías, como representante y defensora de la supremacía blanca. El presidente Lyndon Johnson formó la *Comisión de Desórdenes Civiles*. Como consecuencia de estos trabajos y del sustancial incremento en la investigación académica sobre la temática policial, se determinó que además de la persistencia de la problemática de corrupción y la partidización de la Policía, existían problemas como el creciente distanciamiento entre superiores y subordinados, consecuencia no deseada de la jerarquización de la carrera policial y de la existencia de un número mayor de reglamentaciones. Si bien este último aspecto había tendido a disminuir el abuso de poder y la arbitrariedad en el accionar policial, también había tenido el efecto colateral de disminuir la *iniciativa* que caracterizara por muchos años el accionar policial estadounidense.

Las nuevas tendencias buscaron revitalizar las relaciones entre la Policía y la comunidad. La aplicación de técnicas de *community policing* supuso en primer lugar la adopción por parte de la Policía de una actitud positiva y proactiva respecto de la comunidad; era necesario obtener apoyo de ésta, pero para lograrlo era preciso también rendirle cuentas y escuchar sus necesidades. Otro aspecto que merece señalarse, en Estados Unidos es la denominada *revolución del proceso debido*¹: un conjunto de decisiones judiciales que estableció limitaciones a la conducta policial, particularmente en materia de utilización de pruebas por modo indebido (*Mapp. vs. Ohio*, 1961).

1. O.W. Wilson, *Administración de la Policía*, p. 18.

3. ¿Policía de Estado o Policía de Comunidad?

Un análisis comparativo entre el modelo de *Policía de Estado* y el de *Policía de Comunidad* permite advertir ventajas y desventajas en uno y otro. Las fortalezas del modelo de *Policía de Estado* radican en su más cuidado reclutamiento; en una formación del personal más prolongada; en general, en un adiestramiento más intenso; en la creación de una *carrera policial* que brinda perspectivas de progreso tanto por antigüedad como por mérito; en un mayor grado de *especialización*; en un mayor grado de autonomía respecto de las influencias políticas; en controles institucionales más intensos. Las fortalezas del modelo de *Policía de Comunidad* son, en primer lugar, una mejor y más intensa relación con la comunidad; mayor grado de

iniciativa, especialmente en los cuadros inferiores, respecto del modelo precedente; mayor *trabajo en equipo*; mayor respeto a la habilidad profesional demostrada en la práctica; mayor grado de flexibilidad y de adecuación a cambios; una actitud más *proactiva* y más enderezada a la solución de problemas concretos.

En la práctica, ambos modelos tienden crecientemente a confluir y a adoptar procedimientos o tácticas del otro. Ambos grandes modelos policiales tienen ventajas e inconvenientes.

* José Manuel Ugarte es abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal, así como de institutos de perfeccionamiento de instituciones de seguridad.

POLICÍA: EL MITO DE LA COERCIÓN LEGÍTIMA

Juan Ramón Quintana*

1. La problemática policial

La Policía es una de las instituciones modernas más importantes que contribuyen a la seguridad de los ciudadanos, la sostenibilidad y garantía del orden democrático y al cumplimiento del imperio de la ley. No obstante su amplio campo de responsabilidad, es una de las instituciones menos conocidas y más estigmatizadas por la sociedad. La visibilidad que le otorga la función represiva contra el delito y el desorden público tiende a afectar su imagen en momentos de crisis política e inseguridad ciudadana. En gran parte de los países de América Latina, históricamente fue tratada como mera herramienta coercitiva dirigida a corregir el desorden público y reducir el delito, sin tomar en cuenta otras instituciones del Derecho y el Sistema de Justicia Penal.

A diferencia de lo que ocurre en las democracias más avanzadas, cuya producción académica multidisciplinaria contribuyó a mejorar la comprensión del trabajo policial y facilitar la construcción de instituciones de seguridad, democráticas y relativamente eficaces, en América Latina las ciencias sociales han manifestado un notable desdén por este fascinante objeto de estudio. Existen justificadas razones para ello pues durante mucho tiempo la Policía formó parte de estructuras de represión política ligadas a regímenes de excepción, dejando un legado de desconfianza, prejuicios y desconocimiento.

Pero hay que pensar en que la Policía representa y expresa la presencia estatal más directa y cotidiana, el contacto institucional con los ciudadanos. De ella se espera seguridad, protección de las libertades públicas y conservación de la paz social para cuyo efecto apela al imperio de la ley. No obstante, la crisis de seguridad, la continua suspensión de los derechos públicos y los excesos en el empleo de la

coerción frente a la protesta social, parecen contradecir las misiones constitutivas y básicas de la Policía.

La falta de una política estatal en materia de seguridad pública pero también en materia policial, la gestión gubernamental débil, la inexistencia de control civil democrático y el déficit de fiscalización parlamentaria, son factores que impiden un eficaz cumplimiento de las tareas policiales en democracia. Durante los últimos años, la seguridad adquirió una importancia trascendental debido al aumento de experiencias personales y familiares de victimización, especialmente en aquellas poblaciones más pobres y excluidas. Al parecer, las tasas de criminalidad están tendiendo a aumentar en proporciones significativas en inversa relación con la disminución de las capacidades institucionales del Estado y con sus deficiencias operativas, preventivas y de investigación policial. La falta de coordinación con la esfera judicial, los conflictos de competencia y la secular burocratización policial agregan mayor incertidumbre y sensación de inseguridad en la sociedad.

Si bien la problemática de la inseguridad ciudadana es un asunto que involucra a múltiples instituciones estatales y sociales, gran parte de la responsabilidad recae sobre la Policía puesto que su función constitucional reside en prevenir y reprimir el delito. Sin embargo, su capacidad está sustancialmente mermada debido a su inadecuación a la compleja dinámica de transformación social, la instrumentalización política por parte de los gobiernos y la pérdida de motivación profesional, precariedad material, bajo nivel salarial, mandos inestables, discriminación, racismo, corrupción e impunidad.

2. Roles y funciones

La comprensión de la Policía como órgano estatal adquiere mayor claridad cuando se analizan sus funciones. Al pa-

recer, históricamente las funciones o roles policiales precedieron a su definición. Debe quedar claro que la frontera entre organización e institución policial es bastante borrosa. La Policía constituye una institución que caracteriza el orden social moderno pero al mismo tiempo es una organización que se sujeta y progresa con arreglo a la modernización del Estado.

Identificar para qué sirve o a qué se dedica la Policía es una buena manera de conocer sus funciones. En general, se le atribuye la seguridad de los ciudadanos y el resguardo de la paz pública. De esta función dimana su legitimidad social. No obstante, este mito se desvanece en la medida en que las dinámicas transformaciones estatales y sociales no permiten una rápida adaptación policial a las nuevas demandas de orden, legalidad y convivencia. Los mismos Estados —en particular los más democráticos— reconocen desde una perspectiva preventiva, que junto a la Policía deben funcionar, con similar eficacia, mecanismos e instituciones proactivas como la justicia, sobre todo el aparato procesal. Empero, estas relaciones interinstitucionales no siempre han sido exitosas, sino todo lo contrario.

Una mayoría de los estudios sobre la Policía está dirigida al análisis de su eficacia respecto al control de la criminalidad. La variación de las tasas crecientes de este fenómeno ha activado la demanda social de seguridad. La sociedad considera a la Policía ineficaz en relación al nivel de victimización que experimenta, sin tomar en cuenta las dificultades que tiene para adaptarse a la velocidad e incremento que se operan en la dimensión del crimen. La externalización de conductas, no siempre aisladas de corrupción, refuerza la imagen de ineficacia institucional. La Policía enfrenta severos déficit de recursos, material y equipo porque no siempre la crisis social, en la que se incuba el aumento del delito, se acompaña del apoyo gubernamental (Reiss y Bordua: 1967).

Existen diversos criterios para clasificar los modelos policiales, muchos de los cuales varían según la decisión de los objetivos que deben cumplir. Los estudios señalan que existe una diversidad de modelos policiales como agentes de decisión, gobierno, organización política o culturas institucionales. La aplicación de éstos suele variar con arreglo a las presiones sociales, innovación tecnológica, concertación política, herencia histórica y cambios gubernamentales. En general, la literatura especializada distingue cinco modelos de organización policial: 1) tradicional, 2) racional-burocrático, 3) profesional, 4) comunitario, 5) mixto o híbrido. En algunos casos, la forma cómo se le asignan recursos y se definen sus prioridades definen el modelo policial en cuestión. De la misma forma, la eficacia de la Policía en materia de prevención criminal no depende tanto del esfuerzo de los policías como de la forma de organizar la actividad policial por parte de las autoridades civiles pertinentes. Una mayoría de los trabajos sobre modelos policiales comparados están basados en los análisis de los países europeos y anglosajones dados los

cambios que constantemente experimentan en inversa relación con la inercia que presentan las organizaciones policiales de los países en vías de desarrollo.

La organización policial mixta es una combinación de los anteriores modelos; una síntesis en múltiples ámbitos. Su orientación ecléctica se alimenta de pautas culturales democráticas que desde orientaciones comunitarias, profesionales y burocráticas, tratan de adaptarse a los cambios horizontales y verticales que vive la sociedad a diversa velocidad (Martín, M. 1992; Torrente, D: 1997, 2001). Este modelo está en pujante experimentación tratando de encontrar su punto de equilibrio eficaz apoyado en la prevención situacional del crimen, es decir, en el estudio científico del comportamiento delictivo, en la tecnología y en su capacidad de prevención. Se trata de reapropiar el espacio público perdido por el temor o el miedo, abriendo canales de comunicación, participación social y solidaridad.

Uno de los ejes más críticos para el fortalecimiento del Estado de Derecho pero que está mereciendo mayor atención académica es el control democrático sobre la organización policial. Al respecto, los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todavía muestran vacíos legales y una voluntad poco consecuente con sus funciones constitucionales y los imperativos éticos de la democracia (Fruhling, H.: 1998). Pese a su importancia para el orden democrático, no contamos con ningún trabajo que explore las relaciones informales entre partidos políticos y Policía. Sin duda, una de las mayores deudas que tienen las ciencias sociales en torno al estudio de la burocracia y la organización policial, reside en el vacío de conocimiento sobre desarrollo democrático y gestión política de la seguridad pública.

3. La institucionalidad pendiente

Los Estados modernos sustentan su autoridad administrando todas aquellas expresiones conflictivas que pongan en duda o amenacen el contrato social expresado en la Constitución Política del Estado. La idea de orden democrático proviene precisamente de la relación que se establece entre autoridad y ciudadanía como expresión de las formas representativas reconocidas constitucionalmente.

Nuestra hipótesis de trabajo sugiere que a pesar del tiempo transcurrido por nuestra democracia, en el que se han producido importantes avances institucionales en distintas esferas estatales, no ha sido posible cristalizar la supremacía civil en la gestión política de la seguridad, subordinar la actuación policial a la legalidad vigente y tampoco implantar procedimientos democráticos en la relación política-Policía con el objetivo de consolidar el liderazgo institucional, condición imprescindible para el funcionamiento del Estado de Derecho. Uno de los desafíos que enfrenta el sistema político para garantizar la continuidad democrática y restablecer el imperio de la ley, reside en transformar la racionalidad regresiva de la seguridad que tiene consigo

la instrumentalización no democrática de la Policía. A su vez, esto implica restablecer la capacidad de control social así como la materialización objetiva de la fiscalización parlamentaria, crónicamente ausente en América Latina. En muchos de nuestros países incluso no existen comisiones parlamentarias especializadas en la materia. Estos

factores llevan a una deficiente articulación del sector de seguridad pública y ciudadana, en el conjunto de las instituciones del Estado y dentro del sistema democrático.

* *Sociólogo boliviano, especializado en estudios de Defensa y Seguridad Pública. Actualmente Ministro de la Presidencia de Bolivia.*

LA EFICACIA DE ROLES POLICIALES Y FISCALES EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA CRIMINALIDAD; ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Juan Carlos Rueda *

1. Atención a las víctimas; un olvido secular del sistema penal

En el Ecuador, el sistema judicial penal estrenó recientemente nuevas medidas para mejorar los procedimientos judiciales y policiales, pero sobre todo su accionar conjunto para garantizar una mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad. El trabajo de los funcionarios policiales y los agentes fiscales debe llegar a un nivel de optimización que permita no solamente la búsqueda y construcción de las pruebas, sino también la atención eficiente a las víctimas del delito.

Para ello, debería considerarse como medida prioritaria la capacitación de quienes tienen que atender no solo a las personas que han sufrido directamente un atentado en sus derechos, sino también y de manera solidaria a sus círculos familiares cercanos. Todos ellos son victimizados por la situación y deben recibir, por parte de la Policía, un expedito sistema de apoyo personal, promoción legal y ayuda psicológica. En segundo término debería mejorarse substancialmente la infraestructura para la atención médica, legal y policial que se requiere. Las actuales condiciones de la infraestructura de las que dispone en las jurisdicciones nacional y provincial, solo dan cuenta del desprecio del Estado por la suerte de los afectados por la criminalidad. Sin duda los roles que cumple actualmente la Policía en apoyo de las víctimas es muy precario. Siendo así, es posible que más bien produzcan un efecto perverso de victimización secundaria, al obligar a las víctimas y sus familiares a pulular entre los galpones de la Policía Judicial, amén de las vicisitudes que sufren en las instalaciones de la Fiscalía y las oficinas de los magistrados.

2. Condiciones humanitarias y científicas en la consecución de pruebas en un proceso legal

El rol que se le atribuye dentro del proceso penal a la Policía Judicial es precisamente aquel que le permita garantizar las condiciones de seguridad de los imputados bajo su custodia. Del ejercicio de este rol deben tomar conciencia los funcionarios de Policía, dejando atrás los

métodos de investigación medievales propios de la inquisición, y procediendo de acuerdo con los principios de respeto a los derechos humanos. Solo en la medida en que se conciente al personal policial sobre estos principios, se logrará incrementar la dignidad de su condición profesional.

Los procesos investigativos que realizan agentes policiales y agentes fiscales deben ser llevados en forma conjunta, de tal manera que se logren los resultados que persigue la justicia, evitando que la impunidad genere desconfianza en las instituciones. Efectivamente, el policía, al igual que el agente fiscal, recogen las evidencias, estudian las huellas y rastros que ha dejado el imputado en la escena del crimen, con el objeto de obtener las pruebas que sirvan al juez para sentenciar en consecuencia. Pero durante el proceso debe quedar demostrado que este trabajo conjunto han sido ejecutado bajo procedimientos ajustados a la ley, sin allanar los derechos de las personas. La Policía Judicial tiene que dar un tratamiento especial a la evidencia, tanto en la forma como recoge los indicios, cuanto en la forma de mantenerlos, preservarlos y custodiarlos, para ésta tenga el valor de prueba frente a las exigencias del debido proceso.

Especial importancia en el proceso penal tiene los informes forenses desde el departamento médico legal, así como de las pericias forenses del departamento de criminalística. La Policía científica, como se denomina a esta rama especializada, tiene el mérito de ofrecer pruebas con respaldo objetivo, evitando el manejo poco escrupuloso de testimonios que, por su propia naturaleza, carecen de consistencia. Igualmente, las expectativas de los roles de la Policía Judicial dentro del proceso penal, se ampliarán cuando entienda mejor y priorice sus funciones en la atención de las víctimas. Esto supone una preparación y capacitación con los aportes que vienen de disciplinas importantes como la victimología, que intenta corregir el olvido secular del Derecho Penal respecto de la víctima. Igual cosa sucederá con los otros operadores de justicia pertenecientes a los órganos del Sistema de Justicia Criminal.

3. Medición de la eficacia del Sistema de Justicia Criminal

El Sistema Penal en las actuales condiciones tiene resultados poco satisfactorios. Este sistema que por delegación del Estado, ejerce una delicada función como es la de la coacción legal, no rinde cuenta de sus resultados en función de los fines que persigue. La denuncia de un hecho criminal es el acto que moviliza el aparato penal del Estado, y debe ser la base para establecer los niveles de eficiencia y eficacia del Sistema. Es preciso establecer cuántas de esas denuncias tienen la gravedad y la magnitud para movilizar el aparato penal, considerando el principio de *ultima ratio* del Derecho. Luego es necesario someterlas a una clasificación racional para hacer posible su sistemático seguimiento y establecer cuántas de ellas han sido atendidas y cuáles son en términos concretos los resultados de la pesquisa fiscal.

Otro indicador que podría orientar esta rendición de cuentas para fomentar en la sociedad una satisfacción, traducida en un determinado grado de confianza y credibilidad en el Sistema Penal, es el registro de las detenciones que la Policía uniformada (preventiva) ha efectuado en su trabajo diario. Si tomamos como ejemplo que durante 2006, solo en el cantón Guayaquil, las detenciones llegaron a la cifra de 5.397, en un 95% clasificadas como delitos flagrantes, cuyas hipótesis están definidas en el Código de Procedimiento Penal. Una fiscalización debería señalar

las causas de detención, es decir si aquellas cumplen efectivamente con los presupuestos de la flagrancia y si tienen la magnitud para considerarlas en el ámbito penal. Si ese examen es positivo, deberíamos pasar al registro de cuántas de ellas se han llevado a juicio; cuántas han obtenido sentencias; cuál es el tiempo promedio en que las sentencias se han concretado, además del costo económico que representa para el Estado el ejercicio del Sistema de Justicia Criminal. Esta sería una forma de transparentar el trabajo de todo el sistema.

No solo la Policía está obligada a rendir cuenta pública de sus resultados en forma periódica frente a la comunidad. Deben hacerlo también las otras instancias del Sistema de Justicia Criminal: el Ministerio Público, Juzgados y Tribunales y la Dirección de Rehabilitación Social. Sin duda, esta auditoria del Sistema Penal puede acarrear sospechas si es aplicada por las mismas las instituciones que son parte de él. Por ello es necesario que se comprometan en ese esfuerzo, otras instituciones con legitimidad y prestigio. La Universidad es una de ellas y muy bien puede considerarse esta labor como una obligación moral y cívica, propia de su naturaleza, obligada a la investigación y a hacer propuestas de valor significativo para el adelanto de la ciencia y el perfeccionamiento de las instituciones sociales.

* Crnl. de la Policía Nacional. Licenciado en Criminología.

ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN DEL TC FRENTE AL SERVICIO MILITAR Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Juan A. Rivadeneira F.*

A fines del mes de junio de 2007, la ciudadanía conoció el fallo que el Tribunal Constitucional (TC) –integrado por los vocales que fueron cesados por el Congreso Nacional, siete días después²– había asumido el 17 de abril pasado, pronunciándose por la inconstitucionalidad de las sanciones a las personas que no cumplan con el servicio militar.

La discusión sobre la inconstitucionalidad giró en torno al artículo 88 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, que establecía sanciones para los remisos, y sobre el art. 108 de la misma Ley, que señalaba al Director de Movilización de las FFAA, como el encargado de calificar las peticiones de objeción de conciencia. Según el vocal del TC, Enrique Tamariz, la objeción de conciencia significa: "la oposición a pertenecer o someterse a regímenes cuya naturaleza expone a las personas a órdenes constantes, disciplina férrea, arbitrariedades y castigos permanentes"³.

En el caso, signado con el No. 0035-2006-TC del Tribunal, se incluyen los argumentos expuestos por los demandantes en el proceso de inconstitucionalidad (básicamente un grupo de juristas y especialistas en Derechos Humanos) se destacan: la disciplinización que enmarca el servicio, la inducción de valores propios de la Institución y la contradicción inmersa en la obligación de las personas a someterse a una autoridad que es la misma encargada de hacer cumplir el Servicio Militar Obligatorio. Que esta autoridad sancione a los remisos, y determine o no la validez de una solicitud de objeción de conciencia, solamente complementa lo absurdo de esta situación.

Cabe destacar que tanto la Presidencia de la República, la del Congreso y Procuraduría General del Estado, solicitaron que se desechase la demanda, básicamente por falta de apoyo jurídico. Pese a estos pedidos, el TC falló a favor de los solicitantes. Las sanciones que quedaron sin efecto por el fallo del organismo,⁴ inhabilitaban a los ciudadanos expuesto, considerados como remisos, ni más ni menos a realizar actividades como:

4. La inconstitucionalidad de los art. 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes a: Jorge Alvear Macías, José García Falconí, Jacinto Loaiza Mateus, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz Baquerizo; y cuatro votos salvados de Juan Montalvo Malo, Carlos Soria Zeas, Manuel Viteri Olvera y Santiago Velázquez Coello, en sesión del 17 de abril de 2007.

2. DIARIO EL COMERCIO, Quito, 2007-06-26.

3. Ibid.

desempeñar cargos públicos y privados; matricularse en instituciones educativas, continuar los estudios o graduarse en los establecimientos de educación secundaria, técnica, superior y en los institutos de capacitación profesional; obtener autorización para ausentarse del país; celebrar contratos con entidades públicas o privadas; obtener o refrendar credenciales para conducir vehículos, y, obtener la matrícula de Marino Costanero o de Pescador Artesanal.

Cabe destacar que el fallo ha sido señalado como un avance en el tema del arbitrio de la objeción de conciencia y la supresión de las sanciones que implicaba el no cumplimiento del Servicio Militar. Pero advierten que queda todavía trabajo por realizar en cuanto al reemplazo efectivo de la autoridad que determine como positiva o negativa una objeción, además de las tareas que puedan realizar los que resulten aceptados. Se conoce de la existencia de un Proyecto Reformatorio a la Ley de Servicio Militar Obligatorio de las FFAA, presentado al

Congreso Nacional por la diputada del Partido Sociedad Patriótica, Joba Fon Fay, que entre otros puntos, señala la necesidad de organizar un Servicio Civil a la Comunidad, a ser financiado con un aporte proporcional de los recursos económicos que las FFAA tienen actualmente para el Servicio Militar Obligatorio tradicional y que deberían transferirse "a cada uno de los servicios civiles de la comunidad" que se implemente.⁵ El tema, sin duda abre un capítulo para la discusión de una reforma necesaria y urgente en el proceso que lleve por fin a la profesionalización militar.

* Investigador Democracia, Seguridad y Defensa.
Proyecto Relaciones Civil-Militares.

5. Ver Proyecto Reformatorio a la Ley de Servicio Militar Obligatorio de las FFAA presentado por la diputada Fon Fay:
http://157.100.121.30/ARCHIVOS_USUARIO/28-087.doc

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES EN EL TEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Taller sobre "Modelos Policiales en el Estado de Derecho"

El martes 22 de mayo de 2007, en el Hilton Colón se llevó a cabo el **Taller: "Modelos Policiales para el Estado de Derecho"**, con la participación del especialista argentino, Dr. José Manuel Ugarte. Asistieron los miembros de la Comisión de Modernización de la Policía Nacional, el Jefe de Estado Mayor de la Institución. Entre los invitados estuvieron como invitados académicos y oficiales de Policía. De los objetivos del Taller se destaca el análisis de las características de un modelo policial apropiado para nuestro país, y la formulación de lineamientos para una efectiva conducción y control institucional de las Políticas de Seguridad Pública y Ciudadana. En la

próxima entrega del Boletín DSD, se incluirá una información más completa sobre este tema.

El miércoles 23 de mayo, en la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional, se discutió ampliamente la presentación del Dr. José Manuel Ugarte sobre **"Inteligencia Criminal"**; y el jueves 24 sobre **"Control constitucional, parlamentario y operativo de la Seguridad Pública"**, contando con la presencia de altos Jefes policiales, miembros del Ministerio de Gobierno y alumnos de la Escuela.

Los dos programas contaron con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer.

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

RESUMEN DE LOS TEMAS SOBRESALIENTES EN MAYO - JUNIO 2007

El Observatorio de Relaciones Civil-Militares y Fuerza Pública forma parte del trabajo permanente de la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa; y se propone dar seguimiento a los acontecimientos que competen a las instituciones de la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas, Policía Nacional) para generar una discusión permanente sobre la adecuada gestión de este sector dentro de los parámetros del Estado de Derecho. En el período mayo - junio de 2007 resaltan siete temas fundamentales.

1.- Relaciones Ecuador-Perú

Problema diplomático-político por límites marítimos.- A inicios de mayo surgió la polémica entre Ecuador y Perú. Para Antonio Parra, ex canciller, no existe tal problema de límites, sustentado en la Declaración de Santiago de 1952 y en el Convenio de Lima de 1954, donde se reconoce al más alto nivel el paralelo que define la frontera (EXPRESO, Guayaquil, 04/05/07). Por las declaraciones del presidente Correa acerca de estos límites, refiriendo que ciertos sectores peruanos pretenden crear conflictos limítrofes, se gene-

raron reacciones en el vecino país; por parte del canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, dijo que su país no tiene "ningún tema de límites pendientes" con Ecuador, ni terrestres ni marítimos (EXPRESO, Guayaquil, 07/05/07). Finalmente el presidente peruano, Alan García, atribuyó al problema una "mala información", y descartó algún diferendo político entre las dos naciones (DIARIO HOY, Quito, 08/05/07).

Polémica por visita diplomática de Ecuador a Chile.-

La canciller Espinosa visitó Chile, donde señaló que el diferendo marítimo entre Perú y Chile es bilateral, los resultados de su visita fueron interpretados como un respaldo a la postura chilena (EL COMERCIO, Quito, 11/05/07). En la visita los dos países reafirmaron sus posturas de límites marítimos (EXPRESO, Guayaquil, 11/05/07). Ante las reacciones peruanas, Espinosa las lamentó y dijo que Quito "no interviene" en ese problema. En la declaración conjunta se menciona la intensificación de cooperación "en materia de modernización de la educación, formación militar y de civiles en defensa" (EL COMERCIO, Quito, 12/05/07).

Cita bilateral Ecuador-Perú en Tumbes.- La reunión tuvo el propósito de dar por terminado el tema limítrofe. Esto fue confirmado por el presidente Correa, al decir que "hoy las relaciones entre ambos países viven el mejor momento de su historia"; y que se tiene la intención compartida de suscribir un adendum del Acuerdo Ecuatoriano-Peruano de Integración Fronteriza, firmado en 1998 para prorrogarlo hasta 2019 (EL COMERCIO, Quito, 02/06/07).

2.- Relaciones Ecuador-Colombia

Debate acerca del Plan Ecuador.- Para César Montúfar, es positivo que por parte del Gobierno se haya articulado un proyecto para el sector. Pero hay ciertas dudas, que podrían aplicar riesgosos retrocesos: en cuanto al papel de las FFAA en las acciones de desarrollo en la frontera, alejadas de sus funciones específicas, lo cual contradice a los preceptos democráticos de su profesionalización (EL COMERCIO, Quito, 02/05/07). Para Francisco Carrión, ex canciller, existe dificultad en conseguir los fondos del exterior necesarios, dado el agotamiento de las "mesas de donantes", que aportan en grandes cantidades (EL COMERCIO, Quito, 19/05/07).

Visita de relator de la ONU.- A mediados de mayo, el relator de la ONU para los derechos humanos, Paul Hunt, visitó Ecuador para verificar in situ los efectos nocivos que ocasionan las fumigaciones con glifosato que realiza el Gobierno de Bogotá (EL COMERCIO, Quito,

14/05/07). Lamentó la falta de apoyo de Colombia para tratar los problemas que causa el glifosato (EL COMERCIO, Quito, 15/05/07). Declaró que Colombia debe abandonar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos porque hay evidencias 'creíbles y confiables' de que afectan a la salud física y mental de las personas; y de hacerlo "debe respetar una franja de 10 km. a lo largo de la frontera". Para la canciller Espinosa, esto "es una argumentación contundente, y lo que hace es confirmar la posición que el Ecuador siempre ha mantenido" al respecto (EL COMERCIO, Quito, 19/05/07).

Hallazgo de fosas comunes en Colombia.- Se descubrieron varias fosas comunes en Colombia, se supo que podrían existir varios ecuatorianos entre los 211 cadáveres encontrados, al parecer son víctimas de las FARC y paramilitares (EL COMERCIO, Quito, 06/05/07). El embajador de Ecuador en Bogotá, Alejandro Suárez, se entrevistó con el Canciller colombiano y explicó el trabajo que la Embajada ha diseñado para profundizar las investigaciones acerca de los ecuatorianos supuestamente asesinados, y el primer paso ha sido contactar con la Fiscalía de Colombia (EL COMERCIO, Quito, 17/05/07).

El recurrente debate de los impactos de las fumigaciones colombianas.- Fernando Araújo, canciller colombiano, anunció que "si ciudadanos ecuatorianos presentan pruebas de que han sido lastimados o perjudicados por acciones de nuestra política antidrogas, gustosamente atenderemos las reclamaciones que se presenten formalmente", sobre las indemnizaciones por las afecciones producto de las fumigaciones (EL COMERCIO, Quito, 24/05/07).

Araújo y la Canciller ecuatoriana sostuvieron el 28 de mayo un diálogo en el que predominó el tema de las aspersiones colombianas. La canciller Espinosa señaló que se encuentran complacidos porque Colombia "se ha comprometido a profundizar sus esfuerzos de erradicación manual" (EL COMERCIO, Quito, 29/05/07) Y se acordó que los aspectos relativos a eventuales indemnizaciones por las fumigaciones, fosas comunes, la aplicación del Plan Ecuador, etc., serán discutidos en el marco de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron) entre el 4 y 6 de junio en Bogotá (DIARIO HOY, Quito, 29/05/07).

3.- Debate por ingreso a la Convención del Mar (CONVEMAR)

El convenio de la Convemar reposa en el Congreso desde 2002, y ha sido ratificado ya por 150 países. Por acuerdo firmado en 1982, entre ellos por Ecuador, se

establece 12 millas como mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva. Desde 2002 el Congreso cuenta con un informe favorable de la constitucionalidad del mismo, emitido por el TC y se cuenta con criterios favorables del Ejecutivo y de FFAA (EL COMERCIO, Quito, 09/08/07). El presidente Correa exhortó al Congreso su adhesión por su importancia para el desarrollo (EL COMERCIO, Quito, 19/05/07) La Comisión Nacional sobre Derecho del Mar, dependiente del Ministerio de Defensa, destacó las ventajas de dicha adhesión, señalando que no se contraponen la Declaración de Santiago (1952), donde Chile, Perú y Ecuador declararon tener un mar territorial de por lo menos 200 millas (EXPRESO, Guayaquil, 21/05/07).

La Canciller, la Ministra de Defensa y el Comandante de la Marina, comparecieron ante el Congreso para explicar la conveniencia de la adhesión, H. Arellano (Com. de Marina), explicó que con el convenio Ecuador tendrá jurisdicción sobre un total de 1.291.404 km. cuadrados de mar, mientras que actualmente son sobre 1.111.818 km. (EL COMERCIO, Quito, 23/05/07).

El catedrático de Derecho Internacional, Iñigo Salvador, señala que "justo cuando Chile y Perú se enfrentan sobre sus límites marinos, parece ser el momento menos indicado para siquiera considerar adherir al Ecuador a la Convemar". El problema para él es que Perú cuestiona la naturaleza obligatoria de los acuerdos entre Ecuador, Perú y Chile (1952 y 1954) y "si lo ha hecho frente a Chile, nada impide que lo haga con Ecuador, una vez aceptada la equidistancia por la adhesión a la Convención". Para él, este principio de equidistancia para la fijación de límites adyacentes "pudiera hacer perder al Ecuador una superficie de cerca de 12.000 km. cuadrados de su territorio marítimo" (DIARIO HOY, Quito, 28/05/07).

4.- Caso Larriva: accidente aéreo en Manta

La presidencia creó una comisión de enlace, para que sea el nexo entre la Junta Evaluadora del accidente y la sociedad civil (EL COMERCIO, Quito, 01/05/07). La ministra de Defensa, Lorena Escudero, señaló que se aplazó la emisión del informe de la Junta, el motivo fue la falta de resultados por la investigación de una supuesta violación de las seguridades de la oficina del Crnl. Marco Gortaire (también fallecido). La posición de Escudero fue criticada por los familiares de los oficiales fallecidos, llamándola "mentirosa" porque la denuncia está incluida en el informe de la Comisión. Escudero dejó en claro en "no fue atentado" sino una de las posibles causas "es la pérdida de conciencia situacional", es decir una falla humana (EL COMERCIO, Quito, 04/05/07).

Presentación del informe final de la Junta Evaluadora.- El 16 de mayo se entregó el informe sobre el accidente a la Ministra de Defensa. Entre otros temas se adjuntan las conclusiones de la investigación de la Junta Internacional de Investigación del Accidente Aéreo (EXPRESO, Guayaquil, 17/05/07). El Presidente decidirá las sanciones que aplicará en caso de determinarse culpabilidad en la cadena de mando militar, por permitir la presencia de civiles en operaciones militares (EXPRESO, Guayaquil, 18/05/07).

En el informe se responsabiliza a cinco oficiales y un militar de tropa, se trata de: René Vásquez, comandante de Brigada Aérea (BAE); Hugo Villacís, jefe de Estado Mayor de la BAE; Iván Moreno, ex edecán de Larriva; así como Byron Romero y Fernando Arcos, y el mayor Ernesto Piñeiros, segundo comandante del Grupo Aéreo; y al sargento Álex Segovia de la FAE. Para Escudero se inobservaron procedimientos militares y no se respetó la planificación de las maniobras militares (EXPRESO, Guayaquil, 22/05/07) Los familiares de los fallecidos rechazan el informe presentado al respecto, porque solamente se sancionan a personas de menor jerarquía (DIARIO HOY, Quito, 23/05/07). Ellos piden la destitución y acciones penales contra los jefes del Comando Conjunto (CC) (EL COMERCIO, Quito, 02/06/07) Ante esto, el Jefe del CC., Héctor Camacho, señaló que "si el Presidente quiere que salgo yo me voy. Yo tengo mi posición militar. Mi profesión es ser militar, subordinado al Gobierno, absolutamente respetuoso a las leyes" (EL COMERCIO, Quito, 08/06/07).

5.- Policía y Seguridad Ciudadana

Depuración y reforma policial.- El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, se comprometió a iniciar un proceso de depuración y cambio en la Policía, y a impulsar la modernización de la institución, reiterando que se entregará un monto adicional a los \$460 millones que corresponden a la Policía en este año (EL COMERCIO, Quito, 08/05/07). El Ministro señaló que el Mando Policial considera que existe demasiado personal en acciones administrativas, por eso se justifica la salida a las calles de 7.000 policías, para que pasen a vigilancia ciudadana (DIARIO HOY, Quito, 12/05/07).

Relación Gobierno-Policía.- El Gobierno dio tres semanas a la Policía para que presente un plan contra la delincuencia. Trabajo que lo cumplen la Jefatura de Estado Mayor y la Dirección Nacional de Operaciones (EL COMERCIO, Quito, 22/05/07). Para Bertha García, en Ecuador todavía no se ha subsanado el error de concebir a la Policía como un apéndice de las instituciones militares. Se debe tener una modernización policial y del

Ministerio de Gobierno, para que pueda efectivamente conducirla (DIARIO HOY, Quito, 17/06/07).

Ecuador sin armas.- El ministro de Gobierno anunció un plan operativo para un país desarmado que contempla: requisita de armas, clausura de fábricas clandestinas y prohibición de importar esos productos (DIARIO HOY, Quito, 05/06/07). El Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Johnny Estupiñán, señaló que además se prevé colocar un chip y códigos de seguridad en todas las armas, y lo más importante es implementar una red del Sistema Nacional de Control de Armas. Para el investigador de FLACSO, Fernando Carrión, el plan no es suficiente pero es necesario; y es correcto el inicio de la política, cuando los civiles cuentan con cerca de 280.000 armas y la Policía con 15.000 (EXPRESO, Guayaquil, 05/06/07). Sobre el tema el ministro de Gobierno, señaló que "los importadores tendrán que coordinar los permisos de venta de armas, a través de las FFAA y Policía" (EXPRESO, Guayaquil, 06/06/07).

6.- Ministerio de Defensa, militares

Ministerio de Defensa.- Los empleados civiles de las FFAA entrarán en un proceso de evaluación de su perfil profesional, como parte de la homologación, que responde a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. El Ministerio pondrá en consideración de la Secretaría Nacional de Remuneraciones, un nuevo manual de análisis descriptivo y clasificación de los puestos de dichos empleados. El objetivo es elevar el nivel profesional de 11.700 trabajadores y la posibilidad de mejorar sus salarios (EXPRESO, Guayaquil, 09/05/07).

En cuanto al asesoramiento en el Ministerio, la ministra Lorena Escudero, incorporó a cinco civiles: Normay Wray (Ruptura de los 25), en temas políticos; Hernán Moreano, en asuntos internacionales; Paúl Vanegas, asesor económico; Elena Nájera, área legal y Eugenia Washima, asesora psicosocial. En el viceministerio está Miguel Carvajal. Los nombramientos fueron posibles por las reformas a las leyes militares (EXPRESO, Guayaquil, 15/05/07).

Propuestas para la Asamblea Constituyente.- Se ha creado un Comité Consultivo para actualizar la Política de Defensa, integrada por 14 representantes de distintos sectores, encabezados por la ministra Escudero, y el Subsecretario General. Para uno de sus miembros, Adrián Bonilla, las propuestas son para debatir el papel y la misión de las FFAA, además de su profesionalización, y temas como si las FFAA siguen siendo garantes de la democracia o si mantienen sus actividades de apoyo al desarrollo; además el derecho al voto o no de militares,

pero restringiendo acciones proselitistas dentro de los cuarteles o sus candidaturas. A su vez se discute el límite de las empresas militares y su reestructuración (EXPRESO, Guayaquil, 14/06/07).

Resolución del Tribunal Constitucional (TC) acerca del servicio militar.- El TC declaró la inconstitucionalidad de las sanciones para las personas que no cumplan el servicio militar, la resolución fue aprobada el 17 de abril. La inconstitucionalidad fue discutida sobre el art. 88 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en el cual se establecían las sanciones para los remisos. Además se debatió la ilegalidad del artículo 108, el cual indica que la objeción de conciencia tenía que ser calificada por el Director de Movilización de las FFAA. Para Farith Simon, jurista quien presentó la demanda, las sanciones eran "demasiado fuertes y atentaban contra los DDHH", que eran; inhabilidad para desempeñar cargos públicos y privados, matricularse en cualquier centro de educación secundaria, superior y de capacitación profesional, viajar al exterior, obtener la licencia de conducir; sobre el art. 108 hay "una contradicción, porque la misma autoridad responsable de hacer cumplir el servicio militar y sancionar a los remisos, tiene la facultad para calificar o desvirtuar si las motivaciones de la objeción de conciencia son válidas o no". Finalmente Simon señala que una persona independiente a la milicia debería calificar si los argumentos de una objeción de conciencia son justificados, y la opción al servicio militar debería estar orientada a la labor comunitaria (EL COMERCIO, Quito, 26/06/07).

Sin embargo, para el director de Movilización, José Espinoza, al declarar la inconstitucionalidad del art. 108, se eliminó la posibilidad de que los jóvenes se acojan a la objeción de conciencia, "no existe ningún otro numeral en la Ley que trate sobre este recurso y ahora todos deberá hacer la conscripción", señaló (EL COMERCIO, Quito, 28/06/07).

Cuerpo de Ingenieros del Ejército.- En las obras nacionales los militares se ven obligados a acudir a subcontrataciones a obreros y empresas para poder concluir obras. Pese a sus limitaciones, actualmente el Cuerpo de Ingenieros tiene a su cargo 17 obras entre civiles, viales y petroleras. Para el ex diputado, Ramiro Rivera, mentalizador de la ley que impide a los militares administrar empresas, el Cuerpo de Ingenieros participaba en las licitaciones de las obras con muchas ventajas, "primero porque participaban con los mismos fondos públicos y segundo porque utilizaban bienes del Estado como la maquinaria y otro tipo de infraestructura" (EL COMERCIO, 17/05/07).

Encuentro del Comando Sur de EEUU.- En Quito se organizó el encuentro de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, por parte del Comando Sur de EEUU. El objetivo del encuentro es capacitar a los participantes (miembros de ejércitos de América), respecto al trabajo que realiza el Consejo de Seguridad de la ONU en las zonas en conflicto como mediadores, además se hicieron simulaciones de las operaciones (EL COMERCIO, Quito, 12/06/07).

7.- Relaciones con EEUU

Maniobras UNITAS.- Ecuador no formará parte de las maniobras militares UNITAS que se realizarán en junio de 2007 entre FFAA de EEUU, Colombia, Chile y Perú. La explicación de la ministra Escudero, señaló que "Ecuador únicamente exigió, como ya se ha dado en anteriores ocasiones, se mencione que se respete el protocolo mínimo de reconocimiento de la soberanía nacional", esto para el ingreso de naves o personas militar extranjero en el territorio marítimo ecuatoriano. Dijo que "no es una decisión de Ecuador" (EXPRESO, Guayaquil, 02/05/07). La canciller Espinosa señaló que Ecuador se retira de las maniobras "sobreponiendo la dignidad y soberanía del país" (DIARIO HOY, Quito, 03/05/07).

Autoridades de la Embajada de EEUU respondieron a la decisión, señalando que "a pesar de los mejores esfuer-

zos realizados por ambos países resultó imposible llegar a un acuerdo en cuanto a una fórmula que se aceptable para los países participantes" (EL COMERCIO, Quito, 04/05/07) Michael Greenwald, director de prensa de la Embajada en Quito, habría confirmado que el cambio de sede, habría sido por las discrepancias acerca de la extensión del mar territorial ecuatoriano, además que Ecuador "está tratando de argumentar a la comunidad internacional que tiene 200 millas de límite marítimo y nuestra posición de mucho tiempo... es que respaldamos las 12 millas náuticas de mar que son reconocidas internacionalmente" (DIARIO HOY, Quito, 09/05/07).

Visita del Subsecretario de Estado de EEUU, John Negroponte.- Su presencia en Ecuador se debió, entre otros temas, para combatir las amenazas transnacionales (como el terrorismo y el narcotráfico) que afectan a los dos países. Respeta la postura de Ecuador frente a la Base de Manta, pero recalca el beneficio de la pista que permite interceptar embarcaciones con droga que van al mercado internacional, además de ayudar a proteger la soberanía ecuatoriana violada por los narcotraficantes. Espera que se considere el costo/beneficio de retirar la Base y su importancia en la interdicción contra el narcotráfico internacional (EL COMERCIO, Quito, 10/05/07).

CON EL AUSPICIO DE:



BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Comité Editorial

Bertha García Gallegos
Fernando Bustamante Ponce
Francisco Rhon Dávila
Juan Pablo Aguilar Andrade

Asesoramiento Internacional

Dr. Louis Goodman - American University (USA)
Dr. Gustavo Suárez Perterra - Real Instituto Elcano
(España)

Investigación

Juan Rivadeneira Frisch

Relaciones Públicas

Inés Cevallos Breilh

BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria
Universidad Católica. Torre 2, Piso 9, Oficina 901
Teléfonos:
(593-2) 299 1582
(593-2) 299 1700 ext. 1124

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares del boletín:
e-mail: jarivadeneira@puce.edu.ec